

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

*Área de Gobierno de Ordenación del Territorio y Vivienda
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
Departamento de Actuaciones Urbanísticas
Servicio de Control Jurídico-Administrativo
Sección de Registro Municipal de Solares*

Anuncio

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2019, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

En el *BOP* de fecha 16 de abril de 2019 se publicó el anuncio de exposición pública por periodo de treinta días para presentar las alegaciones que se estimen oportunas. Transcurrido el citado periodo, figura en el expediente certificado de la Secretaría General de este Ayuntamiento, de fecha 28 de junio de 2019, en la que consta que no se ha presentado reclamación alguna. Transcurrido dicho plazo sin reclamación o sugerencia se entiende definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de la ordenanza en los términos señalados en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para general conocimiento se publica a continuación el texto del acuerdo plenario de 5 de marzo de 2019, asimismo se incluye como anexo el texto de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

“ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO PLENO EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019, EN RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE:

PUNTO NÚMERO 17. DICTAMEN REFERIDO A PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, de fecha 27 de febrero de 2019, cuyo texto a la letra es el siguiente:

“La Comisión del Pleno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, conoció informe-propuesta del Departamento de Actuaciones Urbanísticas de la GMU, de fecha 20 de febrero de 2019, el cual copiado a la letra dice:

“Expediente: RS ordenanza.

Solicitante: De oficio.

Asunto: Informe jurídico y propuesta para aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172, 173 y 175 del Real Decreto número 2568/1986, de 28 de noviembre, aprobatorio del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y con respecto al expediente de referencia, se emite el siguiente informe jurídico municipal en base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se expresan con propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Antecedentes de hecho

1) De conformidad con las instrucciones recibidas del señor Coordinador General de Urbanismo y Vivienda y Gerente de Urbanismo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, este Departamento de Actuaciones Urbanísticas está desarrollando los trabajos encaminados a la elaboración y aprobación de una Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas encontrándose dichos trabajos en un grado de desarrollo avanzado con la elaboración de un documento de avance de dicha norma.

2) El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, introduce como novedad la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados por la misma, acerca de:

- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Es por ello que se procedió a tramitar dicha consulta pública previa a través del portal web del Ayuntamiento <http://malagacontesta.malaga.eu/es/propuestas-de-gobierno/>, de conformidad con lo establecido en el artículo 133.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3) Una vez transcurrido el plazo de debate y aportaciones de los ciudadanos y el resto de organizaciones y asociaciones, acerca de las cuatro cuestiones planteadas por el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, se efectuaron por esta Administración las conclusiones, habiéndose aprobado mediante Resolución de 16 de enero de 2018 informe del Departamento de Actuaciones Urbanísticas de respuesta a las sugerencias presentadas por el Colegio de Arquitectos de Málaga, único participante en ese plazo.

4) Tras ello se ha remitido el expediente para informe a la Asesoría Jurídica y a la Comisión de Ordenanzas de la Secretaría General que ha emitido dictamen de 27 de junio de 2018 en el que realiza las siguientes observaciones y recomendaciones:

Se recomienda revisar las referencias normativas realizadas en el artículo 7.2 del proyecto de ordenanza.

Asimismo, se recomienda aclarar la remisión que el artículo 21.2 del proyecto de ordenanza hace al artículo 10 de la misma, al no regularse en este último artículo ningún tipo de documentación.

En relación al artículo 24 del proyecto de ordenanza se recomienda que el soporte del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas sea electrónico.

Asimismo, se recomienda que las menciones que el proyecto de ordenanza hace en diferentes artículos a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana sean sustituidas, respectivamente, por menciones genéricas a la legislación urbanística autonómica o estatal vigente.

Por último, se sugiere renombrar la disposición adicional primera como disposición adicional única al existir una sola y en congruencia con el resto de disposiciones previstas en el proyecto.

5) Tras dar forma al proyecto de la ordenanza adaptándolo a las observaciones y recomendaciones citadas, el mismo se sometió a aprobación de la Junta de Gobierno Local, habiéndose adoptado acuerdo con fecha 21 de diciembre de 2018 aprobando el mismo.

6) Consta en el expediente diligencia de fecha 16 de enero de 2019 de la Secretaria de la Comisión del Pleno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad en la que se indica que, a efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo 134.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, se hace constar que, durante el plazo de presentación de enmiendas, comprendido entre el 9 al 15 de enero de 2019, ambos inclusive, no tuvo entrada ninguna enmienda al punto número 15 “propuesta de aprobación del proyecto de Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, adoptado por la ilustrísima Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2019.

Fundamentos de derecho

Motivación para la redacción de la norma y justificación de los principios de buena regulación contemplados en la Ley 39/2015

La Ley 39/2015 regula en su capítulo VI la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas, en sus artículos 127 a 133. Dicha ley incorpora unos “principios de buena regulación” en el artículo 129 (necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) a los que hay que atender en la elaboración de las normas.

La presente ordenanza tiene como finalidad regular determinados aspectos que, a falta aún del desarrollo reglamentario previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, doten al municipio de Málaga de un marco normativo encaminado a un efectivo cumplimiento de lo establecido en la legislación estatal y autonómica, ordenanza que ya se anunciaba como necesaria en el propio Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad y en la moción adoptada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con fecha 24 de septiembre de 2015.

La eficacia y necesidad de la ordenanza atiende a distintas razones, de orden material y formal que se apuntan:

Tiene una gran incidencia en la esfera de los particulares y en el ejercicio del derecho de propiedad.

Afecta especialmente a áreas de la ciudad sensibles como el Centro Histórico.

Contiene la regulación de los aspectos formales del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas sobre los que la ley guarda silencio al encontrarse derogado el antiguo Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo, al no haber sido asumido por la legislación autonómica en sus disposiciones transitorias. La ordenanza recogería los aspectos relativos a su contenido –datos a incluir sobre la finca y alcance y extensión de dichos datos, forma de llevar el registro (división en libros, secciones, tipos de asientos), publicidad, etc.

El principio de seguridad jurídica tiende a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre. Expresamente advierte la ley de que cuando se establezcan trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, estos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.

Sobre los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad de la norma se hace necesario completar conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como es el caso del de “edificación inadecuada” que requieren un acotamiento y definición técnica precisas que aporte a los particulares la seguridad jurídica

necesaria para saber cuándo los inmuebles de su propiedad pueden ser objeto o no de inclusión en el RMSER.

Por otro lado de la experiencia obtenida en la abundante casuística administrativa producida en los últimos años se plantea la necesidad de normalizar los supuestos de suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento por estar la administración municipal y los particulares en negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio. Esa suspensión debe plantearse con unos requisitos comunes para todos los casos, en un intento de no socavar el principio de igualdad y que se contemplarán en la ordenanza: Presentación de un cronograma de plazos, aceptación expresa del tercero que pueda incorporarse al procedimiento, efectos del incumplimiento de la negociación o pacto. Sin duda son exigencias adicionales a la ley pero necesarias y al estar contempladas en la ordenanza darían cobertura y seguridad jurídica a futuras actuaciones administrativas hasta ahora basadas en la aplicación analógica de las normas de procedimiento administrativo, el principio de igualdad y los propios precedentes de los que no debe apartarse la administración en su actuar sin fundamento.

El principio de eficiencia queda claramente justificado puesto que no implica gastos o cargas administrativas para la administración municipal.

II

PROCEDIMIENTO

El proyecto de ordenanza se ha tramitado de conformidad con lo establecido en los artículos 127 ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el expediente se han recabado los informes preceptivos de conformidad con la normativa vigente.

En concordancia con lo anterior y una vez cumplidos los trámites previos requeridos legalmente, habrá que estar, en lo que respecta a las ordenanzas locales, con carácter general, a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LrBRL), ajustándose dicha aprobación al procedimiento que en dicho artículo se señala:

- a) Aprobación inicial por el Pleno.
- b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
- c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En cuanto a la competencia se atribuye al Pleno la aprobación y modificación de las ordenanzas municipales con sujeción a lo dispuesto en el artículo 123.1 d) y 2 de la LrBRL, siendo necesario el voto favorable de la mayoría simple para su aprobación.

Una vez cumplimentados los trámites previstos en el artículo 130 y s.s. del Reglamento Orgánico del Pleno, procede realizar propuesta a la Comisión del Pleno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad a fin de que eleve acuerdo para la aprobación inicial de la presente ordenanza al Pleno municipal y tras ello el expediente se someterá al trámite de información pública por plazo no inferior a treinta días.

Conclusiones y propuestas

A la vista de cuanto antecede en cuanto a los aspectos jurídicos estudiados, este departamento propone a la Comisión del Pleno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad que eleve al excelentísimo Ayuntamiento Pleno en función de las competencias que tiene asignadas, la adopción de los siguientes



Acuerdos

Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de fecha noviembre/2018 adaptado al dictamen emitido por la Comisión de Coordinación de Ordenanzas Municipales de 27 de junio de 2018 y que ha sido aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de diciembre de 2018.

Segundo. Disponer de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local su sometimiento a información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero. En el caso de que durante el plazo de 30 días otorgado a tal efecto, no se presentase ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, todo ello, en los términos señalados en el artículo 49 c) de la LBRL.

Es cuanto tenemos que informar a la Comisión del Pleno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad que no obstante dentro de su ámbito competencial, resolverá como mejor proceda”.

Resulta de las actuaciones que, el 25 de febrero de 2019, se ha emitido nota de conformidad al respecto por el Secretario General.

Sometido a votación el informe-propuesta transcrito, el resultado fue el siguiente:

La comisión, con la abstención del Grupo Municipal Málaga para la Gente y del Grupo Municipal Málaga Ahora, y con el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Popular, propuso al excelentísimo Ayuntamiento Pleno acuerde prestar su aprobación a la propuesta contenida en la misma”.

Votación

El resultado de la votación fue el siguiente:

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por 26 votos a favor (13 del Grupo Municipal Popular, 8 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Málaga Ahora y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 3 abstenciones (2 del Grupo Municipal Málaga para la Gente y 1 del Concejal no adscrito), dio su aprobación al dictamen cuyo texto ha sido transcrito y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en el mismo propuestos.

En Málaga, a 16 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, PD, el Vicepresidente del Consejo Rector de la GMU, firmado: Raúl López Maldonado.

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de 27 de diciembre de 1978 contempla en su título I los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y reconoce en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada y a la herencia si bien señala que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Por otro lado, el artículo 47 de la Constitución señala que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, señalando el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La legislación estatal de suelo actualmente vigente, inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos, por un lado define el estatuto jurídico de la propiedad del suelo

como una combinación de facultades y deberes y, por otro, apuesta por la regeneración de la ciudad existente proponiendo un modelo de ciudad compacta arbitrando medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo. Como ya expresaba la exposición de motivos del Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, el suelo urbano o ciudad ya hecha, tiene un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.

El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, expresa con claridad dicha voluntad en su artículo 1, definiendo como objeto de la ley, el regular para todo el territorio estatal las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo y un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dicho texto legal regula dentro del título VII Función social de la propiedad y gestión del suelo, en sus artículos 49 y 50 la procedencia y alcance de la venta o sustitución forzosas y el régimen de la venta o sustitución forzosas ante el incumplimiento de los deberes establecidos por la ley.

La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre, en concordancia con los planteamientos constitucionales y la normativa estatal, señala en su exposición de motivos que el urbanismo del siglo XXI tiene como principal reto atender a la conservación, rehabilitación y recualificación de la ciudad existente y particularmente en la recuperación de la ciudad histórica. La exigencia del cumplimiento del deber de edificación, conservación y rehabilitación se configuran como deberes encaminados a impedir la especulación. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en sus artículos 148, 150, 151, 152, 155 y 157.5 establece determinados deberes urbanísticos y los supuestos en los que su incumplimiento comporta la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas así como el procedimiento para la ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación y la regulación del concurso para la sustitución del propietario incumplidor.

La no iniciación de la edificación en el plazo fijado al efecto para las distintas zonas de la ciudad, el incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación y la declaración legal de ruina urbanística comportan la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es un registro público de carácter administrativo, competencia del Ayuntamiento y contemplado tradicionalmente en el ordenamiento jurídico como un instrumento para el fomento de la edificación en suelo urbano a fin de evitar situaciones de degradación de la imagen urbana de la ciudad y de orden especulativo.

La inclusión en el registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras o, en su caso, la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio de la ley, la colocación de la parcela o el solar correspondiente en situación de ejecución por sustitución del propietario incumplidor, que habilita a la Administración salvo que acuerde la expropiación, para la venta forzosa mediante el concurso regulado en el artículo 151 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La “revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga” fue aprobada, definitivamente, de manera parcial, por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, de 21 de enero de 2011 y una vez verificada, por la Dirección General de Urbanismo, la subsanación de las deficiencias a que se refería la citada orden, tal y como se recoge en su Resolución de 28 de julio de 2011, se procedió a la publicación de la normativa en el *BOJA* número 170 de 30 de agosto de 2011.

El Plan General de Ordenación Urbana de Málaga contempla en su artículo 11.2.3 los plazos de edificación en el suelo urbano consolidado, señalando que los propietarios de solares deberán presentar el proyecto definitivo con petición de licencia de edificación con inicio de la edificación dentro de los plazos máximos establecidos en la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro de Solares y, de forma subsidiaria, en ausencia de dicha ordenanza, en los plazos señalados como máximos por el propio Plan General: Un año para determinados ámbitos considerados de especial protección y relevancia (PAM-PEPRI Centro, PAM-R.3 (83) M “Perchel Alto”, PAM-R4 (83) “PERI “Trinidad-Perchel”, PA-R.4 (97) calle Jaboneros y PA-P13 (97) “Perchel Sur”) y dos años para los ubicados en el resto de zonas del suelo urbano consolidado de la ciudad.

Por otro lado, por Decreto 88/2012, de 17 de abril, se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz el sector delimitado de la ciudad de Málaga como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico ajustándose dicha delimitación del conjunto histórico al área urbana en la que concurren los valores históricos, edificatorios, monumentales, artísticos, etnológicos, ambientales y paisajísticos.

La Ley 39/2015 regula en su capítulo VI la iniciativa legislativa y potestad normativa de las administraciones públicas, en sus artículos 127 a 133. Dicha ley incorpora unos “principios de buena regulación” en el artículo 129 (necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) a los que hay que atender en la elaboración de las normas.

La presente ordenanza tiene como finalidad regular determinados aspectos que, a falta aún del desarrollo reglamentario previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, doten al municipio de Málaga de un marco normativo encaminado a un efectivo cumplimiento de lo establecido en la legislación estatal y autonómica, ordenanza que ya se anunciaba como necesaria en el propio Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad y en la moción adoptada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con fecha 24 de septiembre de 2015. La eficacia y necesidad de la ordenanza atiende a distintas razones, de orden material y formal que se apuntan:

Tiene una gran incidencia en la esfera de los particulares y en el ejercicio del derecho de propiedad.

Afecta especialmente a áreas de la ciudad sensibles como el Centro Histórico.

Contiene la regulación de los aspectos formales del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas sobre los que la ley guarda silencio y encontrarse derogado el antiguo Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo, al no haber sido asumido por la legislación autonómica en sus disposiciones transitorias. La ordenanza recogería los aspectos relativos a su contenido –datos a incluir sobre la finca y alcance y extensión de dichos datos, forma de llevar el Registro (división en libros, secciones, tipos de asientos), publicidad, etc.

El principio de seguridad jurídica tiende a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre. Expresamente advierte la ley de que cuando se establezcan trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, estos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.

Sobre los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad de la norma se hace necesario completar conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como es el caso del de “edificación inadecuada” que requieren un acotamiento y definición técnica precisas que aporte a los particulares la seguridad jurídica necesaria para saber cuándo los inmuebles de su propiedad pueden ser objeto o no de inclusión en el RMSER.

Por otro lado de la experiencia obtenida en la abundante casuística administrativa producida en los últimos años se plantea la necesidad de normalizar los supuestos de suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento por estar la administración municipal y los particulares en negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio. Esa suspensión



debe plantearse con unos requisitos comunes para todos los casos, en un intento de no socavar el principio de igualdad y que se contemplarán en la ordenanza: Presentación de un cronograma de plazos, aceptación expresa del tercero que pueda incorporarse al procedimiento, efectos del incumplimiento de la negociación o pacto. Sin duda son exigencias adicionales a la ley pero necesarias y al estar contempladas en la ordenanza darían cobertura y seguridad jurídica a futuras actuaciones administrativas hasta ahora basadas en la aplicación analógica de las normas de procedimiento administrativo, el principio de igualdad y los propios precedentes de los que no debe apartarse la administración en su actuar sin fundamento.

El principio de eficiencia queda claramente justificado puesto que no implica gastos o cargas administrativas para la administración municipal.

El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a los ayuntamientos potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las leyes.

ÍNDICE

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Naturaleza jurídica y publicidad del Registro.

Título primero. *Cumplimiento del deber de edificar*

Artículo 4. Obligación de edificar.

Artículo 5. Presupuestos de la edificación.

Artículo 6. Consideración de solar.

Artículo 7. Plazos para la edificación de parcelas o solares.

Artículo 8. Edificaciones deficientes o inadecuadas.

Artículo 9. Cumplimiento del deber de edificar.

Artículo 10. Declaración de incumplimiento.

Artículo 11. Suspensión del procedimiento.

Título II. *Cumplimiento del deber de conservación*

Artículo 12. Incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación.

Artículo 13. Declaración de Incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación.

Título III. *Efectos del incumplimiento*

Artículo 14. Verificación del cumplimiento del deber de edificar.

Artículo 15. Expropiación y venta forzosa.

Artículo 16. Del concurso para la sustitución del propietario incumplidor.

Artículo 18. Requisitos de la solicitud de inicio de concurso a instancia de interesado.

Artículo 19. Plazo de convocatoria del concurso.

Artículo 20. Requisitos de la convocatoria.

Artículo 21. Procedimiento de licitación forzosa declarado desierto y sus efectos.

Artículo 22. Incumplimiento de las condiciones de adjudicación del concurso.

Título IV. *Organización y contenido del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas.*

Capítulo I. ORGANIZACIÓN DEL RMSER

Artículo 23. Naturaleza.

Artículo 24. Publicidad y acceso.

Artículo 25. Protección de datos de carácter personal.

Artículo 26. Estructura.

Capítulo II. CONTENIDO Y TIPOS DE ASIENTOS

Artículo 27. Contenido.

Artículo 28. Fichas descriptivas.

Artículo 29. Tipos de asientos.

Artículo 30. Inscripción.

Artículo 31. Anotación accesorias.

Artículo 32. Cancelaciones:

Artículo 33. Anotación de rectificación.

Artículo 34. Nota marginal.

Disposición adicional única

Disposición final.

Artículo 1. *Objeto*

Es objeto de la presente ordenanza la regulación del procedimiento para exigir el cumplimiento de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación a través de la ejecución por sustitución por incumplimiento de dichos deberes y la convocatoria del concurso para la sustitución del propietario incumplidor, establecido en la legislación urbanística autonómica vigente así como la regulación de los elementos formales del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Artículo 2. *Ámbito de aplicación*

El ámbito de aplicación de la ordenanza comprende aquellos inmuebles, solares y edificaciones, pertenecientes al término municipal de Málaga que, de conformidad con la normativa urbanística, se encuentren clasificados como suelo urbano o hayan adquirido la condición de tal por haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

Artículo 3. *Naturaleza jurídica y publicidad del registro*

El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas tiene naturaleza jurídica administrativa y estará integrado por todos aquellos inmuebles, solares y edificaciones, que hayan sido incluidos en el mismo en virtud de resolución administrativa dictada por el órgano municipal competente.

El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de carácter público por lo que los ciudadanos podrán acceder al mismo teniendo derecho a que se le manifiesten los libros o a obtener certificación del contenido de los mismos conforme a lo previsto en la legislación estatal vigente.

TÍTULO PRIMERO

Cumplimiento del deber de edificar

Artículo 4. *Obligación de edificar*

Las parcelas y solares deberán edificarse en los plazos máximos fijados en el instrumento de planeamiento urbanístico pertinente o, en su defecto, en el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.

El derecho y el deber de edificar corresponden a quien sea su propietario o cuente con derecho suficiente para ello, sin perjuicio de su ejercicio y cumplimiento, respectivamente, a través de tercero.

Artículo 5. *Presupuestos de la edificación*

Será presupuesto de la edificación de parcelas y solares el cumplimiento de los requisitos señalados en la legislación urbanística autonómica vigente.

Artículo 6. *Consideración de solar*

Se entiende por solar aquella parcela que, por concurrir las condiciones de superficie y urbanización que establece la legislación urbanística y el planeamiento, es apta para ser edificada de forma inmediata, previo, en su caso, el señalamiento de alineaciones y rasantes.

Artículo 7. *Plazos para la edificación de parcelas o solares*

Como criterio general, se entenderá que los plazos para edificar serán los previstos en el PGOU, tanto para los solares existentes a la entrada en vigor del mismo como para los que adquieran dicha categoría con posterioridad. Será, pues, susceptible de inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, mediante el procedimiento previsto en la legislación urbanística autonómica vigente, cualquier solar para el que dicho plazo se encuentre vencido, teniendo en cuenta las siguientes puntualizaciones:

1. Con sujeción a lo previsto en el artículo 11.2.3 del Plan General de Ordenación Urbana, el plazo para la edificación en suelo urbano consolidado para aquellos solares existentes a la entrada en vigor del mismo, será de un año para la solicitud de licencia e inicio de las obras en el plazo establecido en la propia licencia para los incluidos en los ámbitos del PAM-PEPRI Centro, PAM-R.3 (83) M “Perchel Alto”, PAM-R4 (83) “PERI “Trinidad-Perchel”, PA-R.4 (97), calle Jaboneros y PA-P13 (97) “Perchel Sur” y dos años para los ubicados en el resto de zonas del suelo urbano consolidado.

Dichos plazos computan desde la entrada en vigor del Plan General que fue publicado con fecha 30 de agosto de 2011 en el *BOJA*. Los plazos señalados se entenderán como máximos y no se alterarán aunque durante los mismos se efectuaran transmisiones de dominio quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

2. Sin perjuicio de la aplicabilidad plena del principio de subrogación real en materia urbanística, cuando se produzca la transmisión del dominio de un inmueble, susceptible de ser incluido o ya incluido, en el Registro Municipal de Registro y Edificaciones Ruinosas, la actuación de la Administración Pública y los acuerdos que se adopten que afecten al nuevo propietario han de estar inspirados en el principio de proporcionalidad y se valorará su actuación bajo los criterios de flexibilidad, moderación y restricción que el Tribunal Supremo apunta a la hora de apreciar la concurrencia de circunstancias suficientes para proceder o no a la venta forzosa del inmueble.

3. En el caso de inmuebles que hayan adquirido la condición de solar con posterioridad a la entrada en vigor del Plan General, los plazos serán computados desde el momento en que quede acreditado dicha condición del inmueble.

4. El plazo para la edificación en el suelo urbano no consolidado será el contemplado en el artículo 11.2.13. del Plan General vigente (tres años como máximo desde que se urbanice el ámbito).

5. Para aquellos supuestos en los que, además de la obtención de la preceptiva licencia, resulte precisa la tramitación de estudio de detalle o propuesta de ordenación, bien por así establecerlo expresamente el planeamiento general o de desarrollo, bien por la especial configuración de la propia parcela determinada por el Ayuntamiento, el inicio del cómputo del plazo se entenderá entonces referido a la presentación de dichos documentos y no a la licencia, si bien la solicitud de licencia deberá presentarse en un plazo máximo de seis meses con posterioridad a la publicación de la aprobación definitiva de los mismos.

6. No se entenderá cumplido el deber de edificar con la mera solicitud de licencia de edificación o documento que habilite para la ordenación de la parcela (estudio de detalle o propuesta de ordenación), sin perjuicio de que el cómputo del plazo quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la solicitud planteada.

7. No procederá dicha interrupción del plazo cuando la administración haya requerido al interesado para subsanar y/o aportar documentación y dicho requerimiento no haya sido atendido dentro del plazo otorgado por causa imputable a este.

8. Una vez obtenida la preceptiva licencia y en caso de declararse la caducidad de la misma por incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio, ejecución y terminación de la edificación autorizada, esta resolución conllevará el levantamiento automático de la suspensión del cómputo del plazo aplicable para cumplir el deber de edificar. El citado efecto se producirá igualmente en caso de que se declare el archivo del procedimiento de solicitud de licencia por causa imputable al interesado con carácter previo a la expedición de la misma.

Artículo 8. Edificaciones deficientes o inadecuadas y obras de edificación o rehabilitación paralizadas

1. El procedimiento previsto en la legislación urbanística autonómica vigente se aplicará igualmente cuando sobre una parcela o solar exista una edificación deficiente o inadecuada.

2. Se entenderá por edificación deficiente a los efectos de esta ordenanza, aquella que presente algunos de los siguientes aspectos:

- Cegado de huecos de fachada (puertas, ventanas o balcones) con materiales opacos (fábricas de ladrillos o bloques, chapas metálicas o cualquier otro material) que impida ejercer la función de iluminar y ventilar del propio hueco.
- Edificios en construcción sobre los que haya podido constatarse mediante visitas técnicas que la obra se encuentra paralizada al menos durante un año y que no cuente con las fachadas acabadas.
- Edificación sometida a una obra de rehabilitación, en la que se han detenido los trabajos por causa imputable al promotor durante un periodo superior a tres meses, habiéndose demolido elementos estructurales o de cubrición, dejando al edificio en un estado que puede incidir negativamente en la conservación del propio inmueble, vía pública o colindantes.

Los supuestos anteriores se contemplan por incidir de forma negativa en el cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación establecido en la legislación urbanística autonómica vigente, al chocar frontalmente con los requisitos relativos a la seguridad, salubridad y ornato públicos afectando, además, negativamente a la imagen urbana que se percibe desde la calle o espacio público.

3. Se entenderá por edificación inadecuada a los efectos de esta ordenanza:

3.1. Cuando dicha edificación presente una incompatibilidad total o manifiesta con el planeamiento vigente por albergar o constituir usos cuyos efectos de repercusión ambiental vulneren los máximos tolerados por el Plan General, las ordenanzas municipales específicas o disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección del medio ambiente. Estos usos incompatibles pueden afectar tan sólo a una parte del inmueble, en cuyo caso el obligado a su subsanación será el titular o titulares de la zona afectada. El procedimiento de sustitución del propietario incumplidor se tramitará frente a dichos titulares respecto de las zonas en las que no se haya subsanado las incompatibilidades observadas.

3.2. Encontrarse en situación de fuera de ordenación por ocupar suelo calificado en parte como viario, espacio libre o zona verde.

Además de los supuestos reseñados en el apartado 3.1 y 3.2 la consideración como edificación inadecuada requerirá que la edificación presente problemas de seguridad o salubridad de los que quedará constancia a través del correspondiente informe técnico.

4. Constatada la existencia de una edificación inadecuada o deficiente, de oficio o instancia de parte, se procederá a incoar el procedimiento previsto en la legislación urbanística autonómica vigente para su inclusión en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas previa audiencia al propietario, otorgándosele al mismo el plazo de un año para iniciar las obras en aras a subsanar las circunstancias que hayan motivado la consideración de la edificación como deficiente o inadecuada.

Artículo 9. *Cumplimiento del deber de edificar*

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, habilitará al órgano competente para la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas previa audiencia al propietario. Acordada la inclusión se requerirá al propietario a fin de que en el plazo de un año a contar desde la notificación del acuerdo, inicie las obras de edificación de nueva planta, subsanación de las circunstancias que hayan motivado la consideración de la edificación como deficiente o inadecuada o, en su caso, acredite las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria para ello.

Artículo 10. *Declaración de incumplimiento*

1. Una vez constatado, mediante la visita técnica pertinente que, tras el transcurso del plazo otorgado, no se han iniciado las obras ni se han acreditado circunstancias obstativas para obtener la preceptiva licencia, se dará audiencia al propietario del acuerdo que acredite tal circunstancia y de la valoración del inmueble para que, en el plazo de 10 días hábiles, presente cuantas alegaciones y documentos considere oportunos así como cualquier dato respecto a posibles derechos de terceros que pudieran verse afectados en el procedimiento.

2. Transcurrido dicho plazo y resueltas las alegaciones que pudieran haberse presentado se declarará formalmente el incumplimiento determinándose, por ministerio de ley, la colocación de la parcela o solar correspondiente en situación de ejecución por sustitución.

3. La situación de ejecución por sustitución habilitará al municipio, salvo que acuerde la expropiación para convocar y resolver de oficio o a solicitud de cualquier persona el concurso regulado en la legislación urbanística autonómica vigente.

Artículo 11. *Suspensión del procedimiento*

1. La suspensión del procedimiento de declaración de incumplimiento del deber de edificar y venta forzosa para sustitución del propietario solo se producirá si, con carácter previo a la convocatoria del concurso y aprobación del pliego de condiciones correspondiente, el interesado presenta por sí mismo o acompañado de tercero, un cronograma de actuaciones que, como mínimo, habrá de contener los siguientes compromisos:

- Presentar solicitud de licencia de obra acompañado de proyecto básico ajustado a la normativa urbanística en plazo no superior a 60 días naturales.
- Presentar proyecto de ejecución en plazo no superior a 90 días naturales desde la concesión de la licencia de obras.
- Iniciar las obras en plazo no superior a 6 meses a contar desde la expedición de la licencia de obras.
- Ejecución de las obras conforme al proceso lógico constructivo que se estime por el arquitecto redactor del proyecto y que haya sido señalado en la solicitud de licencia de obras.

2. En el supuesto de que el cronograma de actuaciones se presente por el propietario actual y un tercero, ambos deberán suscribir el documento donde se recojan los compromisos adquiridos frente a la administración que deberá adoptar acuerdo expreso y motivado sobre la suspensión solicitada atendiendo a las circunstancias que en el mismo se contengan.

3. Dicho acuerdo tendrá la consideración de acuerdo convencional de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el cumplimiento del mismo será condición sine qua nom para el mantenimiento de la suspensión de los procedimientos encaminados a la venta forzosa, suspensión que será levantada caso de producirse incumplimiento imputable a la propiedad. Para ello la administración realizará la tarea de verificación de presentación de proyectos y las visitas técnicas oportunas durante la realización de las obras hasta que, por su grado de ejecución, se proceda al definitivo archivo de las actuaciones.

4. En el caso de que el cumplimiento del deber de edificar requiera la tramitación y aprobación de instrumento de planeamiento la suspensión operará en los términos señalados en el artículo 7.5 de la presente ordenanza.

5. El interesado podrá solicitar y obtener certificación administrativa del acuerdo de suspensión del procedimiento adoptado por el órgano competente a fin de instar ante el Registro de la Propiedad la correspondiente anotación marginal sobre la finca asumiendo los gastos en concepto de arancel que pudieran devengarse por la práctica de la misma.

TÍTULO II

Incumplimiento del deber de conservación

Artículo 12. Incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación

Se entenderá incumplido el deber de conservación, o en su caso rehabilitación, en los siguientes supuestos:

1. Cuando habiendo sido requerido el propietario de una edificación para mantener el mismo en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, mediante la realización de los trabajos y obras precisos a fin de mantener las condiciones requeridas para su habitabilidad o uso efectivo, este no haya atendido la orden de ejecución en los plazos señalados.
2. El incumplimiento de medidas cautelares dictadas por la administración a fin de impedir que se pueda poner en peligro la integridad o la salud de las personas o los bienes en su caso.
3. El incumplimiento reiterado de las obras necesarias propuestas en los informes de inspección técnica de edificaciones cuando de la inejecución de las mismas puedan derivar daños relevantes para el propio edificio o riesgo para las personas.

Artículo 13. Declaración de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación

1. El órgano competente de la administración podrá optar por la adopción de algunas de las medidas previstas en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal de Conservación e Inspección Técnica de Edificaciones. Para la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas se deberá adoptar previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, con audiencia al propietario.

Se podrá considerar como circunstancia agravante, en el caso de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, el hecho de que la propiedad incumpla reiteradamente la obligación de aportar los correspondientes Informes de Inspección Técnica conforme a la Ordenanza Municipal de Conservación e Inspección Técnica de Edificios.

2. El deber de conservar no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo del plazo para su cumplimiento quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

3. Si durante la tramitación y antes de dictar resolución declaratoria del incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar el propietario acreditase el cumplimiento de dicho deber se procederá sin más al archivo de las actuaciones. De procederse al inicio de las obras se realizarán visitas periódicas hasta comprobar la finalización de las obras.

TÍTULO III

Efectos del incumplimiento del deber de edificar

Artículo 14. Verificación del cumplimiento del deber de edificar

Transcurrido el plazo establecido en la legislación urbanística autonómica vigente, desde la inclusión del solar o edificación en el RMSER se girará visita de inspección técnica a fin de

verificar el cumplimiento del deber de edificar y/o rehabilitar por parte de la propiedad de los inmuebles.

1. En caso de que el propietario haya procedido a cumplir con la obligación de edificar o rehabilitar el inmueble se procederá a la exclusión del mismo del RMSER mediante las correspondientes anotaciones en el Registro Municipal y en el Registro de la Propiedad si la circunstancia de la inclusión se hubiere hecho constar mediante nota marginal sobre la finca.

2. En caso de que el incumplimiento persistiera, se incoará procedimiento dirigido a dejar constancia de dicha circunstancia con audiencia al propietario de la valoración urbanística del inmueble a los efectos de su posible expropiación o venta forzosa.

Artículo 15. *Expropiación y venta forzosa*

Una vez que los solares o las edificaciones se encuentren en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución el órgano competente podrá acordar, motivadamente y previo informe técnico, la expropiación o el inicio del procedimiento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor regulado en la legislación urbanística autonómica vigente y en la presente ordenanza.

El inicio del procedimiento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá realizarse tanto de oficio como a instancia de interesado en virtud de lo establecido en la legislación urbanística autonómica vigente.

Artículo 16. *Del concurso para la sustitución del propietario incumplidor*

El concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificar, conservar y rehabilitar, se iniciará respecto de aquellas parcelas y solares, incluyendo los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, y edificaciones y construcciones que se encuentren en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, sin que se haya acreditado por el obligado el inicio de las obras de edificación, conservación o rehabilitación, según los casos, en los plazos legalmente establecidos.

Artículo 17. *Formas de inicio del concurso*

El procedimiento del concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá iniciarse de oficio o a instancia de interesado.

Artículo 18. *Requisitos de la solicitud de inicio de concurso a instancia de interesado*

La solicitud de convocatoria del concurso para la sustitución de propietario incumplidor, a instancia de parte, deberá reunir en todo caso los siguientes requisitos formales y materiales, que serán presentados en sobres cerrados:

- a) Proyecto de edificación redactado por técnico competente en el que se contemplará el plazo de inicio y ejecución de obras de edificación.
- b) Garantías para hacer frente al deber de edificar por importe del 5% sobre el presupuesto de ejecución de las obras contemplado en el proyecto.
- c) Compromiso de cesión, condicionada al pago de su coste, de los derechos sobre el proyecto técnico acompañado para su ejecución por la persona que resulte adjudicataria del concurso.
- d) Compromiso de abono del precio de la adjudicación al propietario sustituido.

Cualquier interesado que presente oferta podrá optar o no por asumir el proyecto de edificación aportado por el particular que instó la convocatoria, debiendo hacer manifestación expresa sobre dicho extremo en su oferta y devengando, en su caso, los gastos del mismo.

Artículo 19. *Plazo de convocatoria del concurso*

El concurso para la sustitución del propietario incumplidor deberá convocarse dentro del plazo de seis meses siguientes a la constitución legal de la situación de ejecución por sustitución.

Si mediare solicitud de interesado para la iniciación del concurso este se convocará dentro del plazo de los dos meses siguientes a la presentación de dicha solicitud.

Artículo 20. *Requisitos de la convocatoria*

1. La convocatoria del concurso se publicará en el *Boletín Oficial de la Provincia* y en el perfil del contratante de la administración e incluirá las siguientes condiciones:

- a) Precio a satisfacer por el adjudicatario que será el valor de la parcela o del solar, estimado conforme a los criterios legales de valoración, incluyéndose el valor de la edificación existente siempre y cuando proceda la conservación de la misma. A los efectos de la determinación de dicho valor, las cargas y gravámenes, incluidos los arrendamientos que pesen sobre el inmueble se aplicarán como decremento.
- b) Plazo máximo para presentación de proyectos, inicio y ejecución de la edificación y, en su caso, de las obras de urbanización.
- c) Plazos mínimos por debajo de los cuales la oferta será rechazada por considerarse estos temerarios o de difícil cumplimiento.
- d) Garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificación del 5% del coste de ejecución material.
- e) Lugar y plazo para la presentación de proposiciones así como la fecha y lugar en la que se realizará la apertura de los sobres de las propuestas presentadas.
- f) Otras condiciones que se estimen convenientes en función de las dimensiones y localización de la parcela o solar.

2. Las proposiciones de los participantes en el concurso podrán incluir oferta dirigida al propietario de acuerdo de pago en especie.

3. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados en el lugar y dentro de la fecha que establezca la convocatoria del concurso, procediéndose a la apertura de las ofertas en sesión pública de la cual se levantará la correspondiente acta.

4. Antes de la resolución sobre la adjudicación y para el supuesto de ofertas en especie, deberá otorgarse trámite de audiencia al propietario para que pueda manifestar su aceptación de alguna de las ofertas que le hubieren sido formuladas o su rechazo de todas. Transcurrido sin efecto el trámite de audiencia, o habiendo rechazado el propietario todas las ofertas, se procederá sin más trámites a la adjudicación del concurso.

5. En el caso de que el propietario aceptara alguna de las ofertas formuladas, deberá presentar, por sí mismo o a través del correspondiente concursante y dentro del periodo de audiencia, convenio suscrito con dicho concursante y elevado a escritura pública, preparatorio de la resolución del concurso.

6. La diferencia entre el precio fijado en la convocatoria y el resultante de la adjudicación se incorporará al Patrimonio Municipal del Suelo de conformidad con la regulación contenida en la LOUA.

7. La certificación municipal del acuerdo de adjudicación servirá como título de la transmisión forzosa.

Artículo 21. *Procedimiento de licitación forzosa declarado desierto y sus efectos*

1. Si el concurso quedara desierto, el inmueble continuará en situación de venta forzosa por periodo de seis meses más, a contar desde el acuerdo del órgano de contratación. En este plazo el Ayuntamiento podrá adquirir el inmueble con destino al Patrimonio Municipal de Suelo. Asimismo podrá convocar nuevo concurso de oficio o a instancia de interesado que preste la garantía exigida por la legislación urbanística autonómica vigente. En el supuesto de que se convoque este segundo concurso, el precio de la licitación se verá incrementado con los gastos habidos para la convocatoria del primer concurso.

2. Si tras quedar desierto el concurso se presentase solicitud para proceder a la transmisión del inmueble a un tercero, las partes podrán aportar la documentación señalada en el artículo

11 de la presente ordenanza a fin de que por la administración se autorice dicha transmisión y las condiciones para el cumplimiento de deberes urbanísticos, dándose cuenta de la autorización efectuada al Registro de la Propiedad.

3. Transcurrido el plazo de seis meses anterior sin que se haya acordado la adquisición por el Ayuntamiento y sin que se haya iniciado procedimiento para la convocatoria del segundo concurso, la declaración de incumplimiento y el régimen de venta forzosa quedará sin efecto.

En este caso, una vez adoptado el correspondiente acuerdo en este sentido se volverá a computar para el inmueble el plazo previsto en el planeamiento cuyo incumplimiento podrá determinar, nuevamente, una nueva declaración de incumplimiento y su sujeción al régimen de venta forzosa.

Artículo 22. Incumplimiento de las condiciones de adjudicación del concurso

La ejecución por sustitución regulada en la legislación urbanística autonómica vigente así como en la presente ordenanza será de aplicación en el caso de incumplimiento de las condiciones de la adjudicación del concurso. Dicho incumplimiento deberá ser declarado previa audiencia del interesado. En caso de convocatoria de nuevo concurso, al que se aplicarán las reglas del artículo anterior de esta ordenanza, el precio a satisfacer por el nuevo adjudicatario será el setenta y cinco por ciento de la cantidad que resulte de incrementar el precio de licitación fijado para el primer concurso con el importe de todos los gastos necesarios y útiles que haya realizado su adjudicatario para la ejecución de las obras de edificación.

TÍTULO IV

Organización y contenido del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DEL RMSER

Artículo 23. Naturaleza

El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es un registro público de carácter administrativo. La publicidad se hará efectiva por el régimen de consulta que se garantiza en la legislación urbanística, en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en esta ordenanza.

Artículo 24. Publicidad y acceso

1. El derecho de acceso y en consecuencia de obtener copias de los documentos será ejercido en la forma establecida en la legislación general de aplicación.

2. El registro administrativo regulado en la presente ordenanza deberá tener carácter telemático de modo que se facilite su acceso y consulta por medios informáticos de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 25. Protección de datos de carácter personal

Lo dispuesto en esta ordenanza se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

Artículo 26. Estructura

1. El registro se configura como un registro único que se estructura en tres secciones diferenciadas por el tipo de inmueble objeto de inscripción:

Sección 1. Solares.

Sección 2. Edificaciones ruinosas, sobre las que se haya declarado el incumplimiento del deber de conservación.

Sección 3. Edificaciones deficientes o inadecuadas.

2. Dentro de cada una de las secciones se hace una distinción por zonas de la ciudad, diferenciadas según su desarrollo histórico y ámbitos de planeamiento:

- ZONA-A: PAM-PEPRI, Centro.
 - PAM-R.3 (83) M, Perchel Alto.
 - PAMR.4 (83), Trinidad Perchel.
 - PA-R.4 (97), Calle Jaboneros.
 - PA-P-13 (97), Perchel Sur.
- ZONA-B: Resto de la ciudad

Artículo 27. *Contenido*

Tanto en la sección de solares como en la edificaciones ruinosas, los inmuebles se representan en fichas de datos alfanuméricos y gráficos que recogen de manera exhaustiva las características que definen al mismo.

En primer lugar cada ficha identifica el inmueble por la zona y la sección a la que pertenece, asignándole un número de finca dentro del registro y un número de folio que de manera inequívoca representa a un único inmueble.

CAPÍTULO II

Contenido

Artículo 28. *Fichas descriptivas*

Cada una de las fichas del RMSER se estructurará en ocho apartados básicos cuyo contenido está referido a diferentes conceptos que caracterizan al inmueble objeto de inscripción y que serán los siguientes:

1. Situación y descripción de linderos
 - a) Localización de la calle y el número postal.
 - b) Relación de linderos identificados por su orientación geográfica (norte, sur, este y oeste), definiendo si se trata de medianeras o fachadas. Para el primer caso se identifica la finca con la que linda por su localización postal, las medidas y formas del trazado en planta y su referencia catastral.
2. Características físicas
 - a) Naturaleza fiscal (urbana o no).
 - b) Superficie en metros cuadrados (medidos sobre sobre Cartografía Municipal Polivalente E-1:500).
 - c) Perímetro en metros lineales.
3. Circunstancias urbanísticas
 - a) Clasificación del suelo.
 - b) Calificación del suelo o uso asignado por el planeamiento.
 - c) Ordenanza de edificación asignada por el planeamiento.
 - d) Protecciones que les afecte.
4. Información registral
 - a) Registro de la Propiedad en el que está inscrita la finca.
 - b) Titular registral (persona física o jurídica).
 - c) Coeficiente de propiedad.
 - d) Número de finca, tomo, libro y folio.
 - e) Superficie construida y/o de suelo.
 - f) Estado de cargas o gravámenes que recaen sobre la finca.
5. Información catastral
 - a) Titular catastral.
 - b) Domicilio y localidad del titular.
 - c) Superficie construida y/o de suelo.
 - d) Referencia catastral.

6. Otros datos
 - a) Nombre y domicilio de los inquilinos si los hubiere.
 - b) Valor urbanístico del inmueble.
 - c) Plazos para la edificación o rehabilitación del inmueble.
 - d) Cumplimiento de la obligación de edificar.
 - e) Otras circunstancias.
7. Observaciones
 - a) Apartado en el que se puede reseñar otros datos de interés, tales como antiguas direcciones postales del inmueble, etc.
8. Información gráfica
 - a) Compuesta por un plano acotado del inmueble con reseña y medidas de los linderos y superficie del mismo.

La ficha que contenga todos los datos reseñados se acompañará de anexo en el que se recogerán los acuerdos del órgano competente que recaigan sobre el expediente del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Artículo 29. *Tipos de asientos*

Se practicarán mediante diligencia rubricada por el responsable del servicio bajo el que se incardine el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas los siguientes asientos en el correspondiente libro de registro:

- Inscripción.
- Anotación accesoria.
- Cancelación.
- Anotación de rectificación.
- Nota marginal.

Artículo 30. *Inscripción*

Son objeto de inscripción los acuerdos que, a continuación, se señalan:

Actos administrativos por lo que se acuerde la inclusión en el RMSER de un inmueble o edificación.

Actos administrativos por los que se acuerde la incoación y declaración de incumplimiento del deber de edificar y/o rehabilitar.

Actos administrativos por los que se acuerde el sometimiento del inmueble al régimen de venta forzosa y la sustitución del propietario incumplidor.

Artículo 31. *Anotación accesoria*

Se producirá la anotación accesoria en los siguientes supuestos:

- a) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrativas que alteren la vigencia o ejecutividad de los actos administrativos objeto de inscripción.
- b) Las medidas cautelares.

Artículo 32. *Cancelaciones*

Se practicará la cancelación de la inscripción por cualquier circunstancia que produzca la pérdida de la vigencia como puede ser la caducidad del procedimiento o el cumplimiento de deberes urbanísticos en relación al inmueble.

Artículo 33. *Anotación de rectificación*

Los errores materiales, de hecho o aritméticos que se detecten en el contenido de los asientos practicados serán rectificadas, de oficio o a instancia de parte, por el propio encargado del registro mediante anotación de rectificación.



Artículo 34. *Nota marginal*

Cualquier anotación que se considere relevante hacer constar en el RMSE por afectar a la situación de la finca inscrita.

Disposición adicional única

Se aplicará de forma supletoria a las normas establecidas en la presente ordenanza aquellas recogidas en la Ley de Expropiación Forzosa y normativa que la desarrolle.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ordenanza.

Disposición final única

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el *Boletín Oficial de la Provincia de Málaga*, siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 70.2 de la misma norma.

5592/2019